**Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.**

**ACUERDO** de incumplimiento parcial de la publicación y actualización de la información concerniente a obligaciones comunes y específicas del sujeto obligado Ayuntamiento de Agua Dulce, en razón de los siguientes:

**A N T E C E D E N T E S**

**I.** Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, este Órgano Garante determinó conforme a lo establecido en los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de Transparencia Local[[1]](#footnote-1), realizar una verificación oficiosa a las obligaciones comunes y específicas del **primer trimestre de dos mil veintidós** en el Portal de Internet y en la Plataforma Nacional[[2]](#footnote-2) del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz.

**II.** Con fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se emitió el resultado de la verificación inicial, obteniendo el Sujeto Obligado un índice global de cumplimiento en Portales de Transparencia del **veintisiete punto cero nueve por ciento 27.09%**.

**III.** Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, mediante el oficio número **IVAI-OFICIO/DCVC/540/22/09/2022**, se notificó al sujeto obligado el resultado de la verificación inicial, otorgándole un plazo de **diez días hábiles** para que enviara su informe sobre la atención a las observaciones detectadas.

**IV.** Con fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, presentó vía correo electrónico oficio sin número en el cual señaló que se tuvieron algunos problemas con la infraestructura de internet y por tal motivo se estaba trabajando en ello.

**V.** Con fecha siete de noviembre de dos mil veintidós, mediante el oficio **IVAI-OFICIO/DCVC/624/31/10/2022** se notificó al superior jerárquico del sujeto obligado y se le otorgó un plazo de **cinco días hábiles** para que girara sus instrucciones al titular de la unidad de transparencia para atender las observaciones de la verificación realizada. Teniendo como resultado **cuarenta y dos puntos cincuenta y tres por ciento (42.53%).**

**VI.** Que después de una búsqueda en los correos electrónicos [direcciondecapacitacion.ivai@outlook.com](mailto:direcciondecapacitacion.ivai@outlook.com) y [contacto@verivai.org.mx](mailto:contacto@verivai.org.mx), dentro de lapso comprendido del **ocho al catorce de noviembre de dos mil veintidós**, no se encontró registro sobre la recepción de comunicación, promoción o documento suscrito por el titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Agua Dulce.

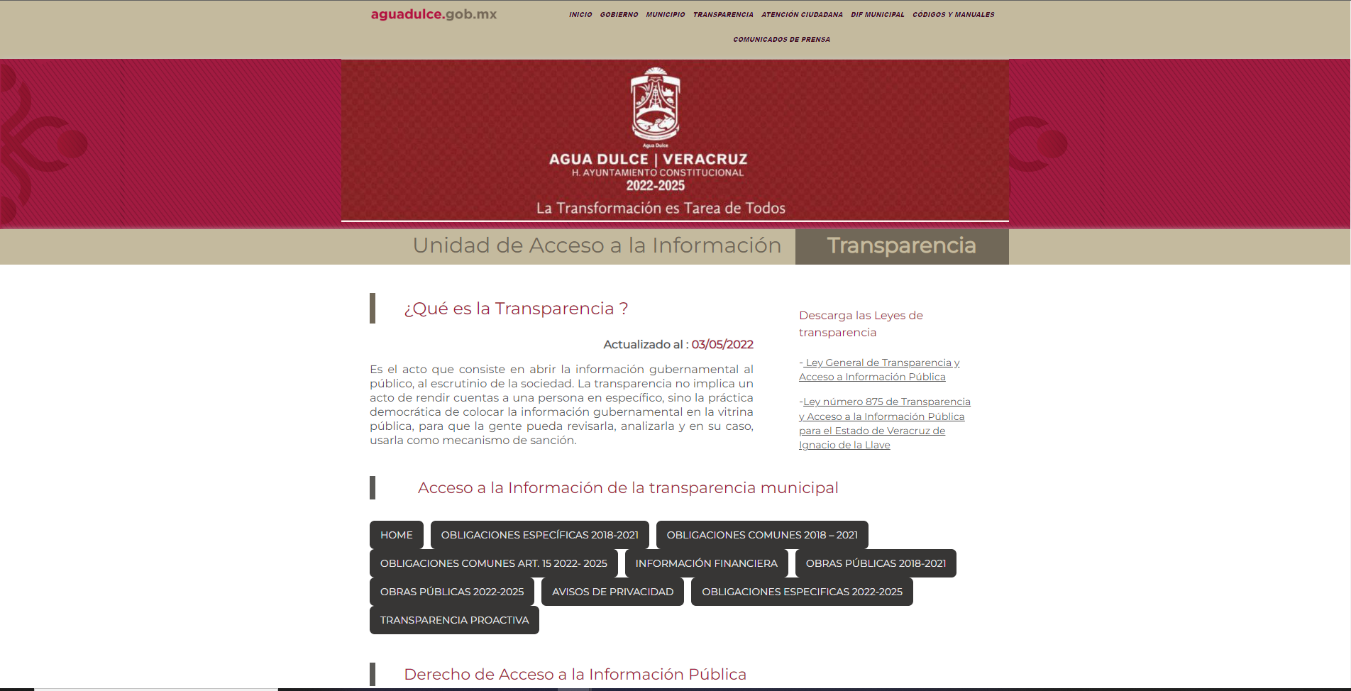
**VII.** Consta en el directorio de titulares de transparencia del año dos mil veintidós que lleva la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, al **C.** **José Alberto Regino Morales,** quien se ostenta como titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado al rubro citado.

**C O N S I D E R A N D O S**

**1.** El Pleno de este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de datos Personales es competente para la imposición de medidas de apremio. Tal competencia encuentra fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, 30, 31 y 32 último párrafo, 246 y 252 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 22 y 23 de los Lineamientos de Verificación[[3]](#footnote-3), y en lo previsto por los artículos 6, párrafos segundo, y cuarto, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, párrafos noveno, décimo y décimo primero, 67, párrafo tercero, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 29, 30, 31 y 32 de la Ley de Transparencia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ahora bien, con fundamento en lo establecido en los artículos 207 y 250 de Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz[[4]](#footnote-4), por el cual establecen, en lo conducente, que las actuaciones se practicarán en días y horas hábiles y que los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, debe tomarse en cuenta que el término de cinco días hábiles para que el titular de Transparencia del sujeto obligado atendiera las inconsistencias fue del **tres al nueve de noviembre de dos mil veintidós**.

**2.** Que **SUBSISTE** el **INCUMPLIMIENTO PARCIAL** de la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia comunes y específicas del sujeto obligado del primer trimestre de dos mil veintidós, en su Portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, como se acredita con las capturas de pantalla siguientes:

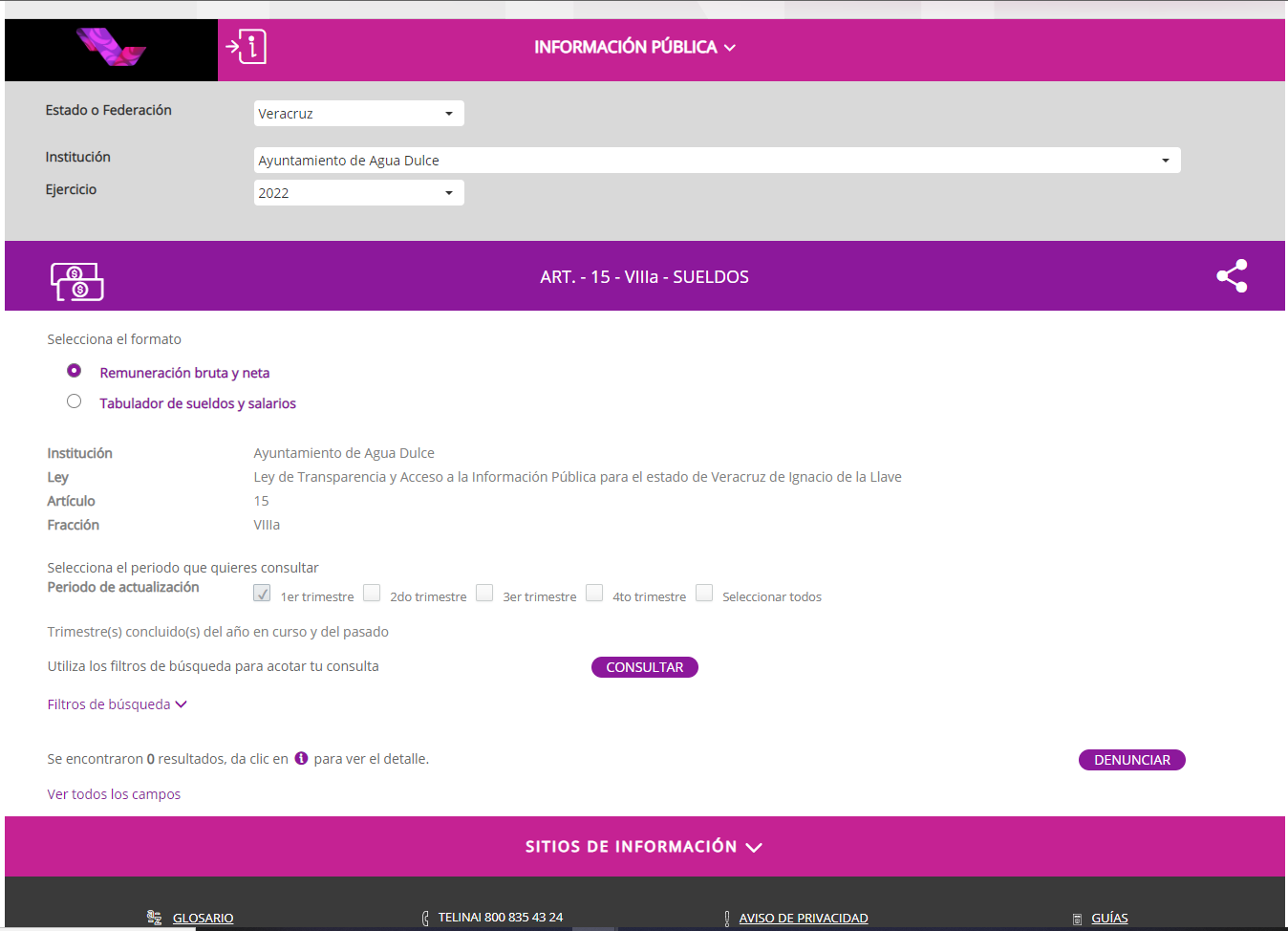
**PORTAL DE INTERNET**

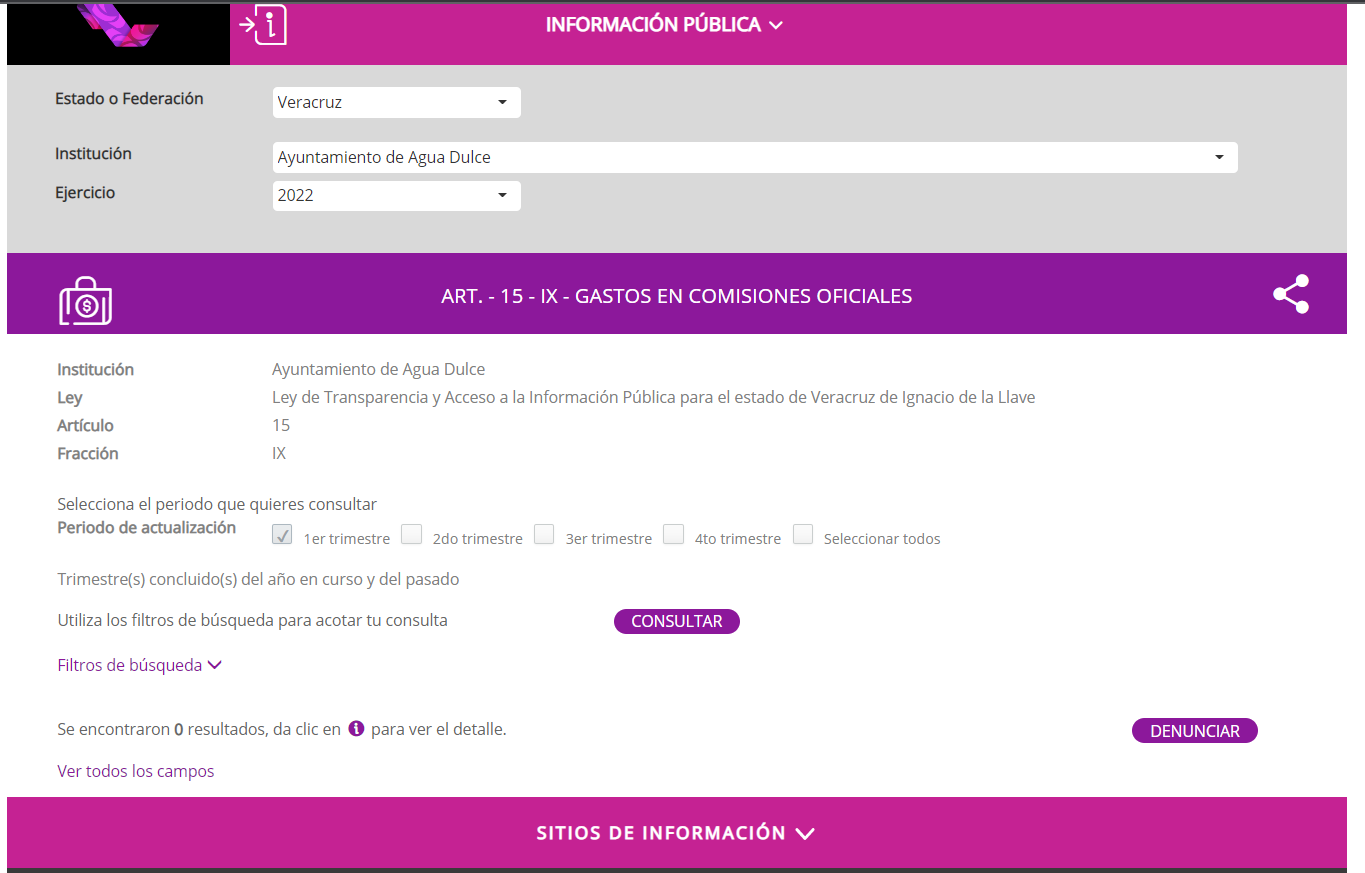


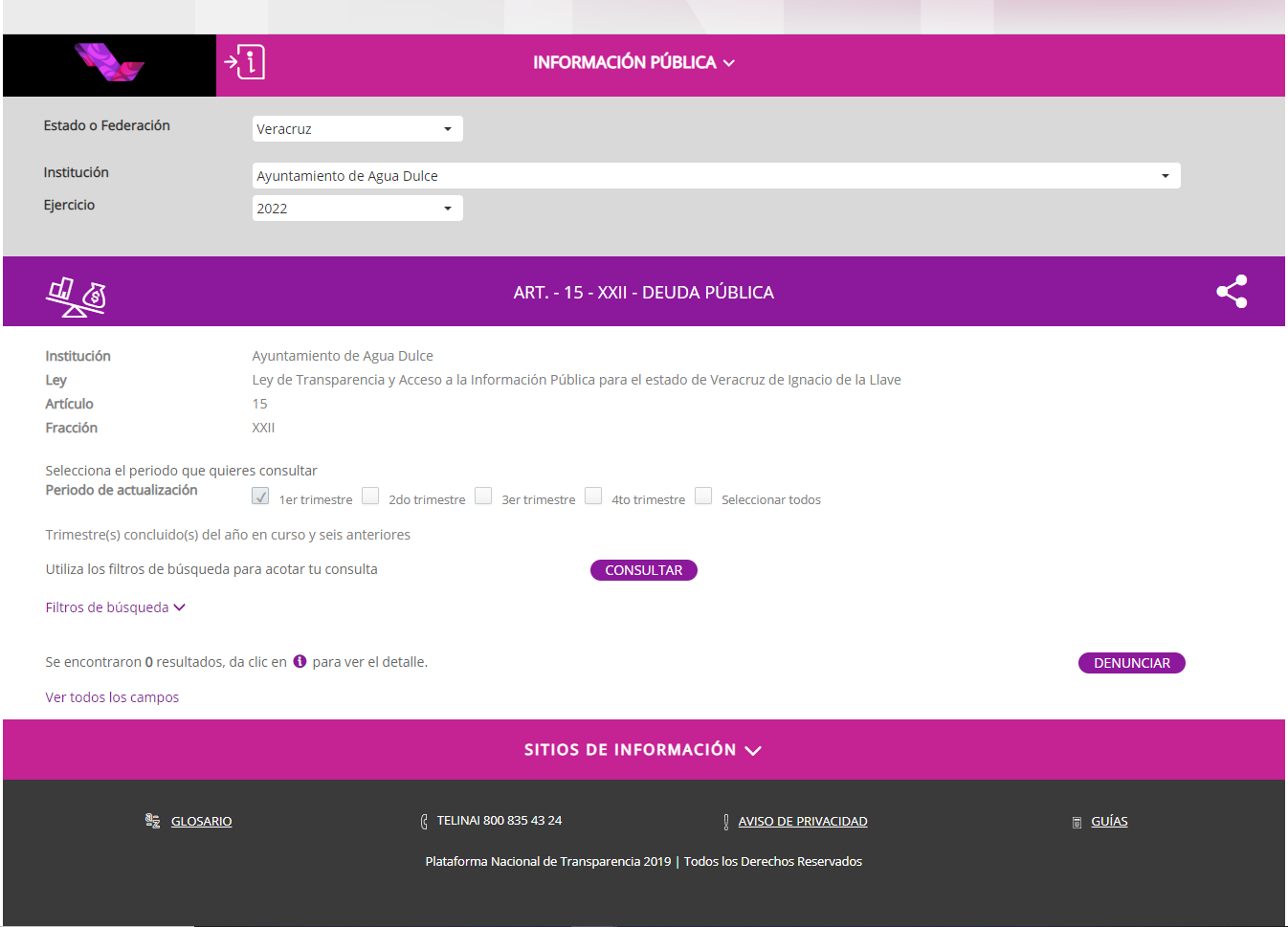




**PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIA**







Se concluye que el titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado incumplió con la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia comunes y específicas del primer trimestre de dos mil veintidós en el Portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia que le impone el numeral 15 de la Ley local de la materia. De ahí que este órgano colegiado, atendiendo a las atribuciones que tiene para garantizar el cumplimiento de la ley de conformidad con lo señalado en el artículo 32, último párrafo y 252 de la Ley citada, procede a fijar la medida de apremio para hacer cumplir las obligaciones de transparencia.

**3.** En virtud de que en autos se demostró el incumplimiento de la determinación de este Instituto, es evidente que contravino el deber legal de actualizar y publicar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia, en los plazos previstos por la Ley de la materia, por lo que se le hace efectivo el apercibimiento, en consecuencia: se **multa** al **C. José Alberto Regino Morales, titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado**; **con ciento cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización,** de acuerdo con las consideraciones siguientes:

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que en las Leyes federales y locales, el establecimiento de los medios necesarios con el fin de garantizar la ejecución de las determinaciones. Hecho por el cual se han establecido medidas de apremio, las cuales derivan la necesidad de dotar a los órganos jurisdiccionales con herramientas para que se encuentren en aptitud de hacer cumplir sus determinaciones, es decir, que sus mandatos sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con que se encuentran investidos.

Estas medidas pueden ser aplicadas cuando exista un incumplimiento, es decir cuando el sujeto obligado incumple con las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo procedente será ordenar la aplicación de una de las medidas de apremio autorizadas por la ley, para hacer cumplir las determinaciones.

El artículo 252 de la ley de Transparencia local, establece que para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, podrá imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio:

1. Amonestación pública, o
2. **Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la unidad de medida y actualización diaria**.

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 252 de la Ley de Transparencia Local, se advierte que, es facultad de este órgano garante hacer cumplir sus resoluciones, para lo cual puede aplicar multas, previo apercibimiento. Al respecto, apegado a parámetros de legalidad, equidad y proporcionalidad, la medida de apremio deber ser tendiente a alcanzar un carácter correctivo, ejemplar, eficaz y disuasivo de la posible comisión de conductas similares.

**INDIVIDUALIZACIÓN DE LA MULTA**

Por cuanto hace a la individualización de la multa, esta debe atender las circunstancias particulares del transgresor y las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, de manera que se justifique que la cuantificación se mueva hacia un punto mayor que el inicial, si esto así procede. Ahora bien, con independencia de la afectación a valores substanciales por el incumplimiento a una resolución, el desacato de los mandamientos de autoridad, por sí mismo implica una vulneración trascendente al Estado de Derecho, lo cual **se trata de una conducta grave** y, por ello, la corrección disciplinaria deberá ser suficiente a fin de lograr desincentivar la comisión futura de irregularidades similares e inhibir la reincidencia.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el hecho de que el legislador fije como límite inferior de una multa una cantidad o porcentaje superior a la mínima carga económica que podría imponerse a un gobernado, no conlleva al establecimiento de una sanción pecuniaria de las proscritas en el artículo 22 constitucional, si no un ejercicio válido de la potestad legislativa, porque si las autoridades administrativas o jurisdiccionales pueden individualizar una sanción, atendiendo a las circunstancias que rodean una conducta infractora, por mayoría de razón, el legislador puede considerar que el incumplimiento de una determinada obligación o deber, con independencia de las referidas circunstancias, da lugar a la imposición desde una medida de apremio mínima a una de cuantía razonablemente elevada, porqué es a este al que corresponde determinar en qué medida un hecho ilícito afecta al orden público y al interés social y cuál es el monto de sanción pecuniaria suficiente para prevenir su comisión.[[5]](#footnote-5)

Por otro lado, debe decirse que se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora. Por lo cual, se tomará en consideración como agravante de una medida de apremio. [[6]](#footnote-6)

En esa tesitura, basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la medida de apremio, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa.

En virtud de lo anterior, se parte de que el titular de la Unidad de Transparencia del **Ayuntamiento de** **Agua Dulce**, incumplió con la publicación de obligaciones de transparencia del primer trimestre de dos mil veintidós; de esta forma, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento decretado en el oficio **IVAI-OFICIO/DCVC/624/31/10/2022**. Por lo que, se impone una multa al titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de Agua Dulce, con cargo a su patrimonio personal a fin de no afectar el erario público.

En principio, se analiza si se cumplen con los elementos que ha señalado la Jurisprudencia I.6o.C. J/189 de los Tribunales Colegiados de Circuito, respecto a la imposición de las medidas de apremio:

**a) Que se dé la existencia previa del apercibimiento.** Esto se cumple, toda vez que, en el oficio identificado como **IVAI-OFICIO/DCVC/624/31/10/2022** se indicó lo siguiente:

***“CUARTO.*** *Se hace del conocimiento al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que, en caso de no solventar los requerimientos, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 88 último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 32 último párrafo de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 22 y 23 de los Lineamientos de Verificación; y podría hacerse acreedor a la imposición de una medida de apremio, de conformidad con lo señalado en los artículos 198 y 201 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; con relación a los artículos armonizados 242 y 252 de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz.*

*Lo anterior, con independencia de que, en su caso, se podrían configurar las causas de sanción establecidas en las fracciones II y VI del artículo 257 de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz.”*

**b) Que conste en forma indubitable qué a quien se pretenda imponer la medida correspondiente, conozca a qué se expone en caso de incumplimiento o resistencia a lo que ordena la autoridad.** Este órgano jurisdiccional considera que este requisito se cumple, toda vez que, al tomar protesta del cargo, en este caso el titular de la Unidad de Transparencia, este se compromete a cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen, siendo una de las obligaciones primordiales, el dar cumplimiento a las determinaciones de las autoridades competentes, pues actuar de lo contrario produce un quebranto a las normas, lo que se traduce en una causa de responsabilidad de carácter administrativo o penal.

**c) Que la persona a quien se imponga la medida de apremio, sea la que efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de que se trate y no persona distinta.** Lo anterior se encuentra plenamente acreditado, pues al servidor público señalado, se le vinculó a la realización del acto ordenado en el oficio identificado como **IVAI-OFICIO/DCVC/624/31/10/2022**, sin embargo, no se dio cumplimiento a lo ordenado en dicho oficio, ello, a que no existe comunicación alguna por parte del titular de Transparencia del sujeto obligado, dentro del plazo de cinco días hábiles otorgados.

Por lo que resulta un hecho notorio que el servidor público, fue contumaz en el cumplimiento a lo ordenado en el segundo oficio que le fue notificado, con el fin de dar cumplimiento al mismo, a pesar de lo anterior y aun cuando fue apercibido de la imposición de la medida de apremio que ahora se hace efectiva, no realizó las acciones ordenadas por este órgano garante local. Dichos actos reiterados de incumplimiento, deber ser vistos como un todo, dada la relación que existe entre el apercibimiento y la determinación donde se hace efectivo el mismo, por lo que resulta suficiente para considerar que la imposición de la medida de apremio se encuentra debidamente fundada y motivada, porque deriva del oficio en la que se formuló el apercibimiento.

**d) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado.**

El perjuicio resulta en virtud de que la actuación omisiva por parte del Sujeto Obligado a través del titular de la Unidad de Transparencia, violenta la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en este caso representa una vulneración al derecho de acceso a la información referente a las obligaciones de transparencia.

Por todo lo expuesto, el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determina:

**PRIMERO.** Con fundamento en el artículo 252 fracción II de la Ley de Transparencia Vigente en el Estado de Veracruz, se impone al **titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de Agua Dulce,** lamedida de apremio consistente en **multa de ciento cincuenta UMAS[[7]](#footnote-7) equivalente a $14,433**.**00 (catorce mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N)**, la que deberá pagar de su patrimonio, es decir esto es que de ninguna manera podrá ser pagada con recursos públicos provenientes del ayuntamiento, ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Ignacio de la Llave, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución. Para lo cual se **deberá girar oficio al titular de la Secretaría en mención, con el fin de que vigile su cobro o en su caso, la haga efectiva a través del procedimiento respectivo.**

La medida de apremio resulta acorde con la gravedad de la falta cometida, en este sentido, si bien, se estipula que la misma podrá consistir de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la unidad de medida y actualización diaria, la que se impone, se considera la más eficaz a fin de velar por el cumplimiento de las determinaciones de este órgano garante, que en la especie lo es el cumplimiento a la publicación de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de dos mil veintidós.

Además, la multa referida, no rebasa los límites constitucionales y convencionales, puesto que se encuentra prevista en el la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, por lo que este Instituto se apega al marco normativo para hacer cumplir sus determinaciones, quien en todo caso, tiene como obligación, la de exigir el cumplimiento de sus resoluciones y vigilar su ejecución. El beneficio que se persigue por parte de este órgano garante, es lograr la tutela efectiva del derecho, a través del cumplimiento de los requerimientos notificados, y con ello garantizar el derecho efectivo de acceso a la información y la protección de los datos personales de los ciudadanos que acuden ante este órgano colegiado.

En consecuencia, remítase copia certificada del presente acuerdo al **titular de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz**, lo anterior de conformidad con la adenda de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, relativa al Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Cobro de Multas Administrativas Estatales No Fiscales, que celebran la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave número 088 de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete.

**SEGUNDO.** Ante la conducta reiterada del titular de la Transparencia de negarse a dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano garante, dese **vista** a la Contraloría Interna del Sujeto Obligado para que inicie los procedimientos respectivos y en su caso, aplique las sanciones correspondientes, en el marco estricto de su responsabilidad, ello, con fundamento en el artículo 262 párrafo segundo de la ley de transparencia local.

**TERCERO.** Toda vez, que pese al requerimiento realizado al titular de la Transparencia no ha sido posible que publique y actualice la información del primer trimestre de dos mil veintidós concerniente a obligaciones de transparencia en los términos establecidos por los lineamientos aplicables, de conformidad con el artículo 253 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, se hace necesario requerir a su superior jerárquico, para que en el término de cinco días contados a partir de la notificación del presente acuerdo dé cumplimiento a lo indicado en los oficios **IVAI-OFICIO/DCVC/540/22/09/2022 e IVAI-OFICIO/DCVC/624/31/10/2022** e informe a este órgano garante sobre dicho cumplimiento, apercibido que de no hacerlo se hará acreedor a una de las medidas de apremio que establece la ley; con independencia de las responsabilidades civiles o de otra naturaleza y de las penas a que se hagan acreedores si sus conductas corresponden a los supuestos descritos en otros ordenamientos civiles, administrativos o penales.

**CUARTO.** Se tiene como asunto no concluido hasta en tanto se cumpla con lo señalado en los oficios antes referidos.

**NOTIFÍQUESE** de manera personal al titular de la Unidad de Transparencia **C. José Alberto Regino Morales**, por oficio a los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Agua Dulce, al titular de la Contraloría Interna del sujeto obligado, asimismo, al titular de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

Así lo acordaron por **UNANIMIDAD** los integrantes del Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ante la secretaria de acuerdos, con quien actúan y da fe.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Naldy Patricia Rodríguez Lagunes**  **Comisionada Presidenta** | | | **David Agustín Jiménez Rojas**  **Comisionado** | **José Alfredo Corona Lizárraga**  **Comisionado** | | **Ana Silvia Peralta Sánchez**  **Secretaria de Acuerdos** | | |

1. Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz. [↑](#footnote-ref-1)
2. Plataforma Nacional de Transparencia. [↑](#footnote-ref-2)
3. “LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA”. [↑](#footnote-ref-3)
4. En adelante, ley de Transparencia local o ley de la materia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lo anterior se plasma en la tesis 2ª. CXLVIII/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación **MULTAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL LEGISLADOR ESTABLEZCA COMO LÍMITE INFERIOR PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN UNA CUANTÍA SUPERIOR A LA MÍNIMA POSIBLE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.** [↑](#footnote-ref-5)
6. Lo señalado, de acuerdo con la Jurisprudencia 41/2020, de la Sala Superior, de rubro: **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.** [↑](#footnote-ref-6)
7. Valor de la Unidad de Medida y Actualización para el 2022 equivalente a $96.22, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Publicada en el portal electrónico del INEGI, consultable en: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/> [↑](#footnote-ref-7)